2

Orientaciones Generales del Presupuesto 2027

El Presupuesto 2027: una nueva legislatura afronta con estabilidad el reto de consolidar el crecimiento de Andalucía

Andalucía inicia la XIII Legislatura bajo la premisa de que la **estabilidad institucional** constituye en sí misma un activo económico y social y una ventaja competitiva para la región. El primer hito en el que esta idea se concreta es el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2027. Solo un marco de gobierno estable, capaz de aprobar sus presupuestos en plazo a lo largo de la legislatura, permite la planificación de inversiones, la previsibilidad fiscal de empresas y familias y la confianza necesaria para que el tejido productivo andaluz proyecte su actividad a medio plazo. La estabilidad se plantea como condición de partida de la propia competitividad regional.

Esa misma estabilidad es la que ha permitido a la Junta de Andalucía estar cerca de los andaluces cuando más lo han necesitado, respondiendo con rapidez ante las emergencias y catástrofes que se han presentado, reforzando de forma sostenida la sanidad, la educación y la atención a la dependencia y acompañando la modernización de los sectores productivos que sostienen la economía andaluza.

Sobre esa base, la Junta de Andalucía ha planteado **el diálogo como método de gobierno**, no como gesto ocasional. La interlocución permanente con los agentes económicos y sociales, con los sectores productivos y con los profesionales de cada ámbito se entiende como una condición para que las políticas públicas respondan verdaderamente a la realidad del territorio. Esa misma lógica dialogante se traduce, puertas adentro de la Administración, en un esfuerzo sostenido de **simplificación normativa y reducción de cargas burocráticas** –en la tramitación ambiental, en la actividad empresarial, en la gestión de las ayudas públicas o en el funcionamiento de los centros educativos y sanitarios–, con el objetivo de que la administración no sea un obstáculo para quien trabaja, invierte o presta un servicio público. Esta vocación de entendimiento no es, sin embargo, incompatible con la **firmeza**: la Junta de Andalucía mantiene, allí donde corresponde, una defensa activa de los intereses de los andaluces frente a decisiones que los perjudican, ya sea en la financiación autonómica, en la corresponsabilidad del Estado ante las infraestructuras pendientes o en el reparto de fondos y competencias, entendiendo que el diálogo y la reivindicación no son términos contrapuestos, sino dos caras de una misma forma de defender a Andalucía.

Es en este marco donde se inscribe la elaboración del Presupuesto de Andalucía para 2027: no como un ejercicio contable aislado, sino como la traducción práctica de esa misma estrategia de diálogo, simplificación y defensa de los intereses andaluces. Las cuentas de la comunidad para el próximo ejercicio se conciben como el instrumento que da continuidad a los compromisos alcanzados con los agentes sociales y económicos, que consolida el esfuerzo de agilización administrativa emprendido en los últimos años, y que respalda con recursos la política de un Gobierno **arraigado en el territorio y comprometido con el bienestar** de todos los andaluces.

Panorama económico 2026-2027: consolidación del crecimiento en un entorno internacional incierto

El arranque de legislatura se produce en un **contexto internacional marcado otro año más por la incertidumbre geopolítica**. El estallido del conflicto en Irán ha presionado al alza los precios del gas y del petróleo, elevando la inflación. Con todo, se advierten motivos para un optimismo moderado derivado de una mayor penetración de las renovables, una menor dependencia fósil que en 2022 y un mercado laboral que se mantiene como uno de los puntos fuertes de la coyuntura. A este respecto, los informes de los principales organismos económicos internacionales confirman que la economía mundial mantiene aún un ritmo de expansión sólido, en un contexto marcado por el pulso entre dos fuerzas de signo contrario: de un lado, el impacto negativo del conflicto en Oriente Medio sobre los países importadores de energía, con un menor peso en la cadena tecnológica global; de otro, el notable impulso que la inversión en inteligencia artificial y la aceleración del ciclo tecnológico mundial están imprimiendo a las economías mejor posicionadas en ese ámbito, que están sorprendiendo al alza con un dinamismo muy superior al previsto inicialmente. A pesar de ello, se espera que la inflación mundial repunte de forma transitoria por el encarecimiento energético, antes de retomar la senda descendente en los próximos trimestres. Más concretamente, se prevé que el área del euro mantenga en 2027 un crecimiento algo inferior a la media mundial, con una inflación que se revisa ligeramente al alza, pero que continúa su proceso de normalización.

En este contexto, España mantiene un ritmo de expansión notablemente sólido y muy superior al de sus socios europeos, sustentado en la fortaleza de la demanda interna y en una contribución positiva del sector exterior. Se espera, por tanto, que el mercado de trabajo español siga generando empleo de forma vigorosa, lo que permitirá continuar reduciendo la tasa de paro.

Andalucía se sitúa, dentro del favorable escenario nacional, como una de las economías más dinámicas del país. Los datos más recientes confirman que el PIB andaluz creció por encima de la media española y de la zona euro, con avances generalizados en todos los sectores productivos: la industria, la construcción –que encadena ya varios trimestres consecutivos de crecimiento sostenido– y los servicios, con información y comunicaciones a la cabeza, mantienen un pulso muy superior al conjunto nacional. El **mercado laboral andaluz refleja igualmente esta fortaleza**, con una población ocupada en máximos históricos y una tasa de paro en su nivel más bajo en varias décadas, de la mano de un tejido empresarial cada vez más dinámico. Las previsiones apuntan a que esta buena marcha se prolongará en los próximos ejercicios, confirmando que la comunidad sigue beneficiándose del impulso del fuerte crecimiento de las exportaciones, el turismo y la inversión.

Andalucía: una gestión responsable que ha ganado la confianza de los mercados

A la favorable coyuntura económica regional ha contribuido la aplicación sostenida de una política de **estabilidad presupuestaria y disciplina financiera** que ha permitido reducir la ratio de deuda sobre el PIB cerca de cuatro puntos y mantenerla por debajo de la media nacional, situando a Andalucía entre las cinco comunidades con menor deuda por habitante. Esta trayectoria ha sido reconocida por agencias de calificación crediticia como Moody's, que ha elevado dos escalones el *rating* de la comunidad hasta A3, el mejor en trece años, y Standard & Poor's, que igualmente ha confirmado la solvencia de la comunidad autónoma situándola también en el grupo de entidades con un grado A.

El refrendo más visible de esta gestión llegó en febrero de 2026, con **la emisión de deuda más exitosa de la historia de la Junta y la primera realizada tras la plena autonomía financiera de la comunidad**. La operación, de 1.250 millones de euros a diez años, recibió ofertas de 114 inversores institucionales de más de quince países por un importe superior a los 5.000 millones de euros. Por primera vez desde 2018, la Junta de Andalucía cubrirá en 2026 la totalidad de sus necesidades de financiación en los mercados, sin recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico ni a otros mecanismos extraordinarios del Estado, dentro de un Marco de Finanzas Sostenibles que ya ha permitido emitir 7.510 millones de euros en bonos destinados a inversión social y medioambiental.

La financiación autonómica, una asignatura pendiente del Estado con Andalucía

Este esfuerzo de responsabilidad fiscal convive, sin embargo, con un problema estructural que no depende de la gestión autonómica: la infrafinanciación crónica de Andalucía dentro del sistema de financiación vigente desde 2009. Solo en 2024, la financiación de Andalucía estuvo por debajo de la media en 1.528 millones de euros; desde 2009, la pérdida acumulada supera los 15.000 millones de euros. La Junta de Andalucía ha reiterado en distintos foros, entre ellos el Consejo de Política Fiscal y Financiera, su rechazo a la última propuesta de reforma del modelo por considerar que consolida el agravio a los andaluces en lugar de corregirlo. Andalucía ha defendido que cualquier reforma debe elaborarse con la participación de todos los territorios y regirse por el principio de igualdad entre españoles y ha insistido en su propuesta de un Fondo Transitorio, dotado por el Gobierno de España, que compense a las comunidades más perjudicadas por el actual sistema mientras este no se reforme en profundidad.

La misma reivindicación de corresponsabilidad del Estado se traslada al ámbito de la **dependencia**, donde, a pesar del incremento de la financiación por parte del Estado para 2027, Andalucía reclama que se le apliquen garantías económicas para que el Gobierno central abone anualmente el 50% del gasto certificado por la comunidad autónoma. La Junta de Andalucía ha cuantificado en cerca de **6.000 millones** de euros la **deuda** acumulada del Estado con Andalucía por este concepto, una reivindicación que se plantea, en todo caso, desde una posición de fortaleza: pese a esa infrafinanciación, el sistema andaluz de la dependencia bate récords históricos, con 360.000 personas atendidas y 566.000 prestaciones a cierre de agosto de 2026, un 69% y más del doble, respectivamente, que en 2018.

Una fiscalidad que protege la renta de las familias

La política de reducción de la carga fiscal se mantiene como una de las señas de identidad del proyecto económico andaluz. Entre los principios que sostienen la legislatura se encuentra la reducción de la carga tributaria como un instrumento de defensa del poder adquisitivo frente al encarecimiento de la cesta de la compra y de los carburantes, presentando el ahorro fiscal acumulado por los andaluces como mecanismo de compensación frente a la subida del coste de la vida. La rebaja progresiva del IRPF, las nuevas deducciones aprobadas y el compromiso de seguir avanzando en la simplificación de tributos propios se entienden como parte de una misma estrategia: que el esfuerzo de quienes sostienen el sistema con su trabajo y su actividad económica sea correspondido con una administración más ágil y menos onerosa, sin que ello comprometa la financiación de los servicios públicos esenciales.

En concreto, el Gobierno andaluz da un nuevo paso en su compromiso con una fiscalidad más justa y moderna, que alivia la carga de las familias y refuerza la actividad económica, en primer lugar, a través de la rebaja de 0,25 puntos de los tipos autonómicos del IRPF en los cuatro primeros tramos, lo que beneficiará especialmente a las rentas medias y trabajadoras, con efectos desde el 1 de enero de 2026. Por otra parte, se amplía la deducción por alquiler a los ascendientes de familias numerosas y se crea una nueva deducción del 15% por gastos en salud ocular de los hijos, de hasta 150 euros anuales por cada uno. En materia de vivienda, el tipo general de transmisiones patrimoniales baja del 7% al 6,75%, y se elevan los límites de valor para aplicar tipos reducidos en la compra de vivienda habitual. Además, los hermanos que hereden una vivienda podrán acogerse a una reducción del 99%. El sector primario se podrá beneficiar de una bonificación del 12,5% en diversas tasas agrícolas, ganaderas, cinegéticas y pesqueras.

Son medidas pensadas para mejorar la vida de los andaluces y seguir construyendo, juntos, una Andalucía más próspera.

Gasto social: los pilares del bienestar social andaluz

Vivienda: actuar sobre la oferta para ampliar el parque disponible

La vivienda es, hoy, uno de los pilares del bienestar y de la cohesión social. Su disponibilidad en condiciones dignas y asequibles resulta determinante para favorecer la emancipación, facilitar la formación de nuevos hogares y fortalecer el arraigo de la población en el territorio. Cuando el acceso se complica, no solo se resiente la economía de los hogares –que destinan una parte creciente de su renta a la vivienda–, sino también el equilibrio territorial, al concentrarse la población en unas pocas zonas y vaciarse otras. Por eso, ocuparse de la vivienda con decisión y visión de largo plazo no es solo una cuestión social, sino una inversión en el futuro colectivo, la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad de nuestras ciudades y pueblos. Como tal, en 2027 se sitúa como una **prioridad absoluta** de las actuaciones presupuestarias.

En esta materia, **el Gobierno andaluz se plantea como uno de sus objetivos de legislatura el aumento de la oferta de vivienda asequible** para lo que se ha establecido como meta la construcción de 20.000 viviendas protegidas y la rehabilitación de 22.000 inmuebles. El diagnóstico de partida apunta a que se trata fundamentalmente de un problema de oferta y de suelo, por lo que Andalucía prioriza actuar sobre la producción de vivienda protegida y sobre la colaboración público-privada para ampliar el parque disponible. En este contexto se enmarca el nuevo **Plan de Vivienda andaluz al que Andalucía aportará 478 millones de euros,** el 40% de la financiación de la nueva fase del Plan 2026-2030, lo que supone multiplicar por seis la aportación autonómica respecto al plan estatal anterior.

En este ámbito, entre las novedades en la actuación de la Junta de Andalucía destaca la puesta en marcha de una línea de **avales** pensada para que las familias numerosas puedan acceder más fácilmente a una vivienda, dotada inicialmente con 25 millones de euros. Además, las políticas dirigidas a los **jóvenes** cobrarán un protagonismo especial: se creará un cupo específico de vivienda protegida, tanto en régimen de alquiler como de compra, reservado a los menores de 35 años y un programa de ayudas destinado a la compra de vivienda para menores de 40 años, con una dotación de 25 millones de euros, junto a otra iniciativa de alquiler con opción a compra que permitirá deducir del precio final del inmueble la totalidad de lo abonado previamente en concepto de renta mensual.

Sanidad: una apuesta sostenida que se traduce en más capacidad asistencial

La sanidad pública es, junto con la vivienda, el pilar esencial de la acción del Gobierno andaluz en 2027 y, como tal, ocupa un lugar central en el Presupuesto y refrenda el **compromiso de continuar fortaleciendo el sistema sanitario con más recursos**, mejor organización y mayor capacidad de respuesta.

Desde 2018 el Gobierno andaluz ha incrementado el presupuesto sanitario en cada ejercicio, ha ampliado la plantilla con 30.000 nuevos profesionales, ha construido y mejorado hospitales y centros de salud, ha modernizado los equipamientos médicos y ha ampliado la cartera de servicios con nuevas vacunas y cribados. En concreto, se han construido 7 hospitales nuevos, 25 centros de salud, 13 hospitales de día, 19 consultorios, 7 áreas de urgencias y 23 centros de atención infantil temprana. En 2027 esta trayectoria tendrá continuidad con un aumento adicional de la inversión que permitirá acometer nuevas infraestructuras de gran envergadura, así como renovaciones de las ya existentes. Se plantea una reforma profunda del modelo organizativo del Servicio Andaluz de Salud, orientada a modernizar una estructura creada hace medio siglo mediante la incorporación de la inteligencia artificial, la digitalización y fórmulas de gestión de vanguardia, elaboradas de la mano de los profesionales y los expertos del sector.

Como parte de esta apuesta modernizadora, además, se pretende crear un **polo de innovación en salud**, con el que Andalucía aspira a convertirse en un referente europeo en investigación, tecnología y formación sanitaria. Precisamente, la Junta ofertará en la convocatoria 2026-2027 el mayor número de plazas de Formación

Sanitaria Especializada de su historia, un 40% más que en 2019, con un refuerzo singular de especialidades estratégicas como Medicina de Urgencias y Emergencias, que casi triplica su oferta, o Medicina Familiar y Comunitaria. El sistema sanitario público ha logrado además 22,7 millones de euros para el desarrollo de cuatro proyectos de compra pública de innovación centrados en la atención pediátrica y perinatal, la oncología, la gestión del dato sanitario y la optimización de quirófanos, un reconocimiento a la labor investigadora que la Junta de Andalucía quiere consolidar como palanca de transformación del sistema sanitario andaluz.

En conjunto, el Presupuesto de 2027 persigue dar un salto cualitativo desde la creación del sistema sanitario andaluz, combinando el aumento sostenido de recursos con una transformación profunda de su organización, con el propósito de ofrecer a los andaluces una atención cada vez más ágil, moderna y de calidad.

Educación: menor ratio, más plantilla y más oportunidades

La educación pública es el pilar esencial de la **igualdad de oportunidades**. Permite a cada joven desarrollar su talento y proyectar su futuro en condiciones equitativas. Sostenerla y fortalecerla –con más recursos, mejores infraestructuras y docentes reconocidos– no es solo una inversión en el presente**, sino la base sobre la que se construye una sociedad más cohesionada, próspera y preparada para los retos** que vienen, siendo este el objetivo de la Junta de Andalucía. En el curso 2026/2027 un total de 1.776.288 estudiantes de enseñanzas no universitarias se incorporan a las aulas andaluzas, atendidos por 131.525 docentes en 7.248 centros. Pese al descenso de alumnado asociado a la caída de la natalidad, la **Junta de Andalucía refuerza de nuevo las plantillas**, que alcanzan los 109.128 efectivos en la red pública, un 7,7% más que en el curso 2018/2019, y reduce la ratio a 22 alumnos en el segundo ciclo de Infantil. El refuerzo específico de más de 4.300 docentes adicionales se dirige de manera prioritaria a la atención a la diversidad y a la mejora de la competencia matemática y lectora.

En el curso 2026/2027, más de 92.400 escolares de tres años han iniciado el curso y el 95% de las familias andaluzas con hijos de cero a tres años disfrutan de educación gratuita. Por otra parte, el Presupuesto de 2027 completa la **universalización de la educación infantil**, al incorporar la gratuidad en el tramo de 0 a 1 año para el próximo curso 2027/2028.

La **Formación Profesional, por su parte, continúa consolidándose como una apuesta estratégica**, con 14.000 nuevos alumnos y una oferta pública que se acerca ya a las 200.000 plazas –30.000 más que el curso anterior– y 28.000 nuevas plazas para atender la creciente demanda de la modalidad *online*.

A lo anterior se suma un intenso esfuerzo inversor en infraestructuras, con obras de mejora en 494 centros y construcción de nuevos centros, que garantizan una enseñanza de calidad y en constante modernización para todo el alumnado andaluz.

En el terreno del apoyo a las familias, destaca el mantenimiento del paquete de ayudas educativas, con una dotación en el entorno de los 1.000 millones de euros, destinado a financiar, entre otras actuaciones, libros de texto, becas, comedores y transporte escolar, así como actividades extraescolares y otras medidas de apoyo a las familias en el ámbito educativo.

Finalmente, en el **ámbito universitario** debe destacarse el compromiso de mejora continua de la financiación, de manera que **el Presupuesto de 2027 duplicará al menos el incremento de financiación destinado a las universidades públicas** respecto al ya aplicado en 2026, que se sitúa por encima del 1% del PIB. El curso 2026/2027 arranca, además, con datos muy positivos: las diez instituciones públicas andaluzas ofrecen 80.555 plazas de nuevo ingreso, un 2,1% más que el año académico anterior, y un catálogo de 1.540 titulaciones –619 grados, 730 másteres y 191 doctorados–, que incorpora 37 nuevos títulos orientados, entre otros ámbitos estratégicos, a la inteligencia artificial, la salud, la industria y la actividad turística, y que se enmarcan en las 52 nuevas titulaciones puestas en marcha desde 2025 dentro de la nueva programación académica.

Complementando el modelo de financiación, y con carácter extraordinario, el Presupuesto 2027 contempla la concesión de préstamos a las Universidades Públicas de Andalucía, por importe de 50 millones de euros, que atenderá actuaciones de infraestructuras, equipamientos e instalaciones de ejecución plurianual, así como a las obligaciones de pago exigibles vinculadas a inversiones ya realizadas o en ejecución.

A este esfuerzo por ampliar y modernizar la oferta formativa se suma el mantenimiento de un amplio paquete de **ayudas al estudiantado**, dotado con 59,6 millones de euros, que incluye 43,6 millones destinados a bonificar el 99% del coste de los créditos en primera matrícula, tanto en grados como en másteres; 12,7 millones para el complemento autonómico del programa Erasmus+, incrementado un 5% este curso; y nuevas medidas como la reducción del precio de la primera matrícula de los másteres habilitantes hasta igualarlo al del grado, la exención de tasas para las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inserción, para las víctimas de violencia de género y de terrorismo y para las personas con discapacidad, así como la reserva de un 1% de las plazas de grado para personas en riesgo de exclusión social, una medida pionera en España.

De este modo, se refuerza la conexión entre conocimiento y tejido productivo, garantizando al mismo tiempo la igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza superior. A ello se suma el impulso a la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, con la que se busca situar a la universidad andaluza como motor de transformación a través del conocimiento, la innovación y el talento.

La atención a la dependencia: un giro sustancial hacia un modelo más ágil y cercano

La atención a las personas en situación de dependencia constituye uno de los ámbitos donde la Junta de Andalucía ha registrado los avances más significativos, con un **giro sustancial en la gestión del sistema que se traduce en cifras récord**. Andalucía cuenta ya con 360.000 personas beneficiarias, un 66% más que al comienzo de la legislatura, y se han concedido más de 566.000 prestaciones, casi el doble de las existentes en 2019. Junto al aumento de cobertura, se ha logrado reducir el tiempo medio de espera para acceder al sistema hasta situarlo en el plazo más corto de los últimos quince años.

Este avance responde a una **estrategia integral** que combina la agilización de los trámites, el refuerzo de los servicios comunitarios y la ampliación de la teleasistencia, con el objetivo de ofrecer una respuesta más rápida y cercana a las personas en situación de vulnerabilidad. La Junta de Andalucía ha establecido la tramitación preferente de los expedientes de dependencia, de manera que los casos más urgentes reciban atención prioritaria y ha fortalecido la red de servicios sociales comunitarios, que actúa como puerta de entrada para la valoración, el acompañamiento y el seguimiento de las personas dependientes. Con este fin, se apoya financieramente a los ayuntamientos para que doten a sus centros de más recursos humanos y tecnológicos, permitiendo una atención más personalizada en todo el territorio.

La estrategia andaluza no se limita a ampliar coberturas: aspira a **integrar la dependencia en un modelo de cuidados centrado en la persona** en el que la prevención, la rehabilitación y el apoyo a las familias cuidadoras ocupan un lugar destacado. Se impulsan programas de respiro familiar, formación para cuidadores y ayudas económicas que permiten compatibilizar la atención en el hogar con la vida laboral, al tiempo que se fomenta la profesionalización del sector mediante formación continua y mejores condiciones laborales, con el objetivo de atraer y retener personal cualificado. En paralelo, se están incrementando las plazas en centros residenciales y centros de día para personas mayores y personas con discapacidad.

En esta misma línea de cuidado a los colectivos más vulnerables, el Gobierno andaluz ha anunciado una medida pionera: un plan de Atención a la Soledad que incluirá acciones de detección, prevención y acompañamiento para las personas –cerca de un millón en Andalucía– que viven en soledad sin haberlo elegido. Con todas estas actuaciones, la Junta de Andalucía consolida un sistema de atención a la dependencia más ágil, más humano y mejor dotado, que sitúa a las personas y a sus familias en el centro de la acción de gobierno.

Una política de empleo al servicio de las personas y las empresas

El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2027 consolida un modelo de política de empleo orientado a la **modernización de los servicios públicos, la atención personalizada al deman-**

dante y la conexión real entre la formación y las necesidades del tejido empresarial andaluz. Lejos de plantearse como un ejercicio continuista, la estrategia del Gobierno andaluz apuesta por transformar las particularidades del mercado laboral regional en oportunidades de mejora, impulsando la creación de empleo estable y de calidad como motor del crecimiento económico y de la cohesión social.

El eje central de esta transformación es el **Modelo de Gestión Integral**, una herramienta que unifica la orientación laboral y el asesoramiento a empresas bajo una misma plataforma tecnológica. Gracias a este modelo, toda la red de oficinas de empleo andaluzas incorporará un perfilado de competencias más preciso, capaz de conectar de forma eficiente a las personas demandantes con las vacantes reales del mercado, al tiempo que se refuerza el Perfilado Estadístico y el uso de la inteligencia artificial para anticipar necesidades formativas.

La orientación profesional ha dejado de entenderse como un trámite administrativo para convertirse en el corazón de la política activa de empleo. A través de la **Red Andalucía Orienta**, se financian unidades especializadas que diseñan itinerarios personalizados de inserción, ofreciendo un acompañamiento intensivo e individualizado a las personas desempleadas, con especial atención a quienes presentan mayores dificultades de acceso al mercado laboral: jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, colectivos en riesgo de exclusión social y parados de larga duración.

En el ámbito de la mejora de la empleabilidad, el Gobierno andaluz mantiene y refuerza programas de probada eficacia, como el Programa de Empleo y Formación, que combina el aprendizaje teórico con la práctica profesional remunerada en ocupaciones de utilidad pública, o las Experiencias Profesionales para el Empleo, que facilitan el primer contacto con el entorno laboral real. A ello se suma la Iniciativa Alma para mujeres y jóvenes, que impulsa la inserción sociolaboral y la movilidad transnacional de colectivos vulnerables, incluyendo itinerarios formativos y prácticas en países de la Unión Europea.

El **trabajo autónomo** ocupa un lugar central en esta estrategia, y los resultados avalan esa apuesta: Andalucía mantiene de forma ininterrumpida desde mayo de 2021 el liderazgo nacional en número de personas trabajadoras autónomas, hasta el punto de que, según los últimos datos de la Seguridad Social, la comunidad cuenta ya con más trabajadores autónomos dados de alta que personas desempleadas. A ello se suma que Andalucía es, además, la comunidad con más empresas inscritas en la Seguridad Social de toda España, una posición que ocupa de forma prácticamente ininterrumpida desde que existen registros. Para consolidar este liderazgo, el Gobierno andaluz continúa desplegando el Plan Estratégico Andaluz del Trabajo Autónomo 2024-2027, que identifica las dificultades específicas de este colectivo y articula un catálogo de medidas de acompañamiento a lo largo de todo su ciclo de actividad. Entre ellas destaca la Cuota Cero, una bonificación que permite a las personas autónomas que inician su actividad no pagar cuota a la Seguridad Social durante el primer año, ampliable a un segundo si su rendimiento neto no supera el salario mínimo interprofesional; una medida en la que Andalucía es pionera, al bonificar la cotización correspondiente al mecanismo de equidad intergeneracional, ofreciendo así una exención más completa que el resto de los territorios. A estas ayudas se suman las subvenciones al relevo generacional en los negocios, el apoyo a las asociaciones profesionales del sector y el impulso a la economía social, ámbito en el que Andalucía también lidera la creación de empresas y empleo a nivel nacional, con cerca de 6.300 cooperativas activas.

La **estabilidad laboral y la contratación indefinida** siguen siendo prioridades irrenunciables. Las subvenciones dirigidas a pymes y personas autónomas que apuestan por contratos estables consolidan un entorno favorable a la generación de empleo de calidad y al fortalecimiento del tejido productivo, en una comunidad donde emprender por cuenta propia se ha convertido en una vía consolidada de acceso al mercado de trabajo.

La política de empleo andaluza se completa con planes transversales que amplían su alcance: la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo, orientada a construir **entornos laborales más seguros y saludables**, y la Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental 2030, que impulsa nuevos yacimientos de empleo vinculados a la economía circular, la reforestación y las energías renovables.

La trayectoria reciente del mercado de trabajo andaluz confirma el acierto de este enfoque conjunto. **Andalucía tiene el número de personas ocupadas más alto de toda su serie histórica** y la tasa de paro más baja registrada en diecinueve años, lo que sitúa a la región en una senda de mejora sostenida que contrasta con etapas anteriores de mayor debilidad estructural. Este avance resulta especialmente significativo entre los colectivos que las políticas activas de empleo señalan como prioritarios: el desempleo juvenil y la tasa de paro femenina, unos resultados coherentes con el esfuerzo formativo, de orientación

y de acompañamiento dirigido específicamente a estos colectivos. Pese a que los resultados avalan la estrategia de la Junta, persisten todavía retos muy importantes en el mercado de trabajo, por lo que el Presupuesto 2027 redoblará sus esfuerzos para continuar impulsando la creación de empleo de calidad en la comunidad autónoma.

Infraestructuras: la mayor inversión en conservación de carreteras en veinte años

La política del Gobierno andaluz concibe las infraestructuras y la movilidad como **garantía de igualdad de oportunidades, cohesión territorial y crecimiento económico** para toda Andalucía. Desde 2019, la comunidad ha protagonizado una profunda transformación en materia de movilidad, infraestructuras, puertos y logística, sustentada en la capacidad de planificación, inversión y ejecución, reflejo de una gestión basada en el rigor y en la ejecución efectiva de los proyectos. El **PITMA 2030**, guía que ordena esta transformación, roza ya el 83% de ejecución y ha movilizado 3.640 millones de euros, con ejes como el fomento del transporte público que superan incluso el cien por cien de cumplimiento. Los resultados se traducen en récords de viajeros en transporte público, que en 2025 alcanzaron los 138 millones y que se prevé superen los 150 millones en 2026.

La política de **movilidad de la Junta avanza hacia un modelo sostenible y digital**, articulado en torno a la Estrategia Andaluza de Movilidad y Transporte Sostenible, marco de referencia hasta 2050, que coordinará a través de los consorcios metropolitanos la movilidad de más de 6,4 millones de andaluces y 258 municipios. En 2027 se contempla la elaboración de un nuevo mapa concesional del transporte por carretera, la implantación de información en tiempo real para los usuarios, la puesta en marcha de un centro de gestión y control del transporte público y la modernización de la tarjeta interoperable de la red de consorcios, que permitirá un acceso homogéneo a todos los modos de transporte. Se reforzarán además las plataformas reservadas y los carriles bus-VAO en los accesos metropolitanos para ganar velocidad y se desarrollarán corredores ciclistas metropolitanos y ejes ciclistas urbanos conectados con estaciones e intercambiadores. En el ámbito rural, el programa Andalucía Rural Conectada, que ya supera el centenar de rutas y atiende a más de 381.000 habitantes en 159 municipios, continuará ampliándose.

En el **terreno ferroviario**, se mantiene la expansión de las redes metropolitanas, con las prolongaciones del metro de Granada, del metro de Málaga y del metro de Sevilla –una inversión movilizada superior a los 1.900 millones de euros– y la puesta en servicio de los nuevos tranvías de Jaén y de Alcalá de Guadaíra, mientras que, en Cádiz, el Trambahía consolida ya dos millones de usuarios al año.

En **materia viaria**, el Gobierno andaluz ha adoptado la decisión de garantizar una inversión mínima de **150 millones de euros anuales** para conservación de carreteras. Además, en el marco del Programa de Refuerzo de la Inversión tutelado por la Consejería competente en materia de Hacienda, en 2027, se prestará también atención preferente a la conservación y mejora de la red viaria andaluza, con una dotación de 192,8 millones de euros, de los cuales **181,5 millones se destinan al reasfaltado de la Red de Carreteras de Andalucía** y **11,3 millones a actuaciones prioritarias en obras.**

Por otro lado, se impulsarán también los corredores estratégicos de alta capacidad, como la Autovía del Olivar, el Eje de Almanzora o el eje Ronda-Málaga-Campillos, junto a actuaciones como la mejora de la A-384 Arcos-Bornos, la A-306, la A-311 o la variante este de Utrera. Por su parte, el Plan Andalucía Actúa, puesto en marcha por el Gobierno andaluz en 2026, con el objetivo de mitigar los efectos del temporal del mes de febrero y dotado con 278 millones de euros, en 2027 contará con una dotación presupuestaria de 62,8 millones de euros destinados a culminar la reparación de los daños causados por el temporal en la red viaria.

A todo lo anterior se suma el **impulso de la economía azul** a través de la modernización de los puertos andaluces y lonjas pesqueras, la licitación de nuevas concesiones portuarias y la consolidación de una red logística interconectada, con la puesta en servicio de la terminal intermodal de Antequera y el desarrollo de nuevas terminales en San Roque, Majarabique y Níjar, que aspira a situar a Andalucía como la gran plataforma logística del sur de Europa.

Un apoyo transversal al tejido productivo: de las grandes cadenas de valor a las pequeñas y medianas empresas

La política de la Junta de Andalucía para reforzar el tejido productivo se articula como una estrategia transversal que combina **financiación, digitalización, suelo industrial y simplificación administrativa,** con el objetivo de que empresas de todos los tamaños ganen en competitividad. El eje central de esta apuesta es el Plan de Acción CRECE Industria, que identifica cadenas de valor prioritarias –aeronáutica, agroalimentaria, química, metalúrgica, energías renovables o economía circular– y diseña incentivos a medida.

Dentro de este marco, el apoyo a las medianas empresas ocupa un lugar destacado. Los **Incentivos Integrados de Competitividad y Energía** (INCEA) movilizan más de 400 millones de euros para mejorar la eficiencia energética de las pymes industriales e impulsar proyectos de hidrógeno verde, almacenamiento energético y minería sostenible. Otro instrumento que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha en este ámbito transversal es un ambicioso **paquete de apoyo a las empresas de tamaño intermedio**, el segmento conocido como «midmarket». Para ello se ha impulsado el Club «MidMarket Andalucía TRADE», una iniciativa que ya reúne a más de treinta empresas altamente reconocidas en sectores estratégicos como los servicios, la ingeniería y consultoría, la industria y agroindustria, el sector químico, plásticos y envases, la logística avanzada y la aeroespacial. El programa contempla incentivos por una cuantía de 104,5 millones de euros orientados fundamentalmente a I+D y, una cantidad que se verá complementada por recursos procedentes de nuevos instrumentos financieros y que pueden alcanzar aproximadamente los 80 millones de euros. A ello se suman convocatorias específicas de incentivos a la I+D empresarial, líneas para el acceso a mercados de financiación alternativa y ayudas para abonar comisiones de avales. El Gobierno andaluz ha creado también el Observatorio «MidMarket» Andaluz, que ofrece servicios de asesoramiento en internacionalización e innovación y está encargado de investigar el tejido empresarial de un segmento en el que existen 366 empresas de estas características, que facturan conjuntamente más de 31.000 millones de euros y emplean a más de 163.000 trabajadores.

Igualmente, merece destacar el sistema híbrido de financiación empresarial gestionado por Andalucía TRADE. **Con incentivos directos y fondos reembolsables por valor de 540 millones de euros**, que ha reducido notablemente los plazos de resolución y ha triplicado el incentivo medio por proyecto respecto a 2017. A ello se suman tres fondos de capital riesgo para *startups* y empresas en expansión, avales y una línea específica de transformación digital –Industria 5.0–.

La **modernización de espacios productivos** completa este esfuerzo: 2.377 polígonos industriales repartidos en 541 municipios se benefician de ayudas para su renovación, la mayor cifra movilizada con este fin, al amparo de la nueva Ley de Espacios Productivos de Andalucía. En paralelo, la digitalización de pymes y autónomos avanza con la I Estrategia Andaluza de Emprendimiento Digital, que financia *software* de gestión, comercio electrónico y ciberseguridad, y la futura Ley de Mejora de los Procedimientos acortará los trámites que condicionan la puesta en marcha de proyectos.

Con este conjunto de instrumentos, la Junta de Andalucía dibuja un modelo en el que grandes cadenas tractoras, pymes y autónomos avanzan de la mano, convirtiendo la inversión comprometida en empleo, innovación y mayor valor añadido para toda la economía andaluza.

A ello contribuye igualmente el impulso a la **internacionalización de las empresas**, de forma que la proyección exterior de las empresas andaluzas es uno de los grandes objetivos de la política económica de la Junta de Andalucía, que lo hace a través de Andalucía TRADE, la agencia pública que aglutina el asesoramiento, la financiación y la promoción exterior del tejido productivo regional. Esta entidad ofrece consultoría especializada en comercio exterior, aspectos jurídicos y posicionamiento de marca, además de formación para preparar a las empresas a operar en mercados internacionales. A ello se suman ayudas para sufragar la participación en ferias, los viajes de prospección y las agendas de negocio, que financian entre el 65% y el 100% de estos gastos, con especial atención a mercados como Estados Unidos, México, Brasil, Marruecos, China, India o Japón, en línea con el Plan de Diversificación de Exportaciones.

El resultado de esta estrategia se refleja en cifras muy positivas: **Andalucía cerró 2025 como el segundo mejor año exportador de su historia**, con más de 40.000 millones de euros facturados, situándose como la tercera comunidad en ventas al exterior y la única con balanza comercial positiva, tendencia que se ha reafirmado en el primer semestre de 2026 con cifras récord. El empleo vinculado a las exportaciones supe-

ra ya los 452.000 puestos, mientras que las empresas exportadoras regulares rondan las 5.900. A través de su red exterior, con sedes en decenas de países, la Junta de Andalucía ha desarrollado miles de acciones de apoyo y refuerza la captación de inversión extranjera, que en 2025 alcanzó su mejor registro histórico, con 1.364 millones de euros, un 40,5% más respecto al año anterior, mientras que el capital extranjero en el conjunto de España descendía un 21,8%, consolidando a Andalucía como uno de los destinos más atractivos de España para el capital foráneo.

Ciencia e innovación al servicio del tejido productivo y de la sociedad

Junto al impulso directo a la industria, la Junta de Andalucía despliega una política transversal de investigación e innovación que **conecta el conocimiento generado en la región con su tejido productivo**, reforzando así la competitividad de las empresas y su capacidad de generar valor añadido. Esta apuesta se apoya en **infraestructuras científicas y tecnológicas de primer nivel** que sitúan a Andalucía en la vanguardia europea como: el Observatorio Astronómico de Calar Alto, el CEUS de Huelva, el Centro de Vuelos Experimentales de Villacarrillo, la futura base logística del ejército en Córdoba o el Centro de Innovación en Tecnologías de Fabricación Avanzada de Cádiz, entre otros. En el terreno de la energía de fusión, la región lidera además proyectos de alcance mundial como el acelerador de partículas IFMIF-DONES en Granada, y el Tokamak Smart, en Sevilla, junto con avances relevantes en biotecnología aplicada a la agricultura, ámbitos que refuerzan el papel de Andalucía como referente científico y tecnológico.

Este ecosistema se sustenta en la **estrategia andaluza de I+D+i,** EIDEA, con un compromiso presupuestario de más de mil millones de euros para el periodo 2022-2027, y se completará con la Ley ACTIVA de Ciencia, Tecnología e Innovación que, una vez aprobada, permitirá poner en marcha un programa integral de atracción, retención y consolidación del talento investigador, dirigido a incorporar a profesionales de prestigio internacional.

El objetivo es elevar la inversión en I+D+i hasta el 2% del PIB, afianzando el ecosistema que forman universidades, *clústeres* de innovación, industria y parques científico-tecnológicos, con la agencia TRADE como conector estratégico entre el conocimiento y la empresa. En esta misma línea destaca la coordinación del nodo regional del "Enterprise Europe Network", para mejorar la competitividad internacional de las pymes, así como el impulso a los ocho parques científicos y tecnológicos de la región, que han pasado de 1.600 empresas y 40.000 empleos en 2018 a 1.790 empresas, más de 13.000 millones de euros facturados y cerca de 79.000 empleos en 2025, prueba del impacto real que la innovación tiene ya sobre el empleo y la actividad económica andaluza.

La industria, motor de transformación y empleo

La Junta mantiene su objetivo de consolidar a Andalucía como una de las grandes regiones industriales de España. La comunidad es ya la segunda región española en industria de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio, gracias a un ecosistema que combina grandes empresas tractoras, pymes especializadas y centros tecnológicos. Para reafirmar esta trayectoria, el Gobierno andaluz desplegará durante la legislatura programas y líneas de **incentivos que superan los 1.600 millones de euros**. De esa cifra, 993 millones ya se gestionan a través de 56 iniciativas en marcha, mientras que otros 623 millones corresponden a 31 actuaciones adicionales en cartera, lo que refleja una hoja de ruta con un fuerte componente de ejecución inmediata.

La reciente constitución de la **Alianza Andaluza de la Industria de Defensa** impulsada junto a clústeres como Andalucía Aerospace o el Cluster Marítimo Naval de Cádiz, busca reforzar esa posición de liderazgo con instrumentos como los incentivos y la financiación reembolsable de Andalucía TRADE, que movilizarán 540 millones de euros, o los 150 millones adicionales para atraer grandes proyectos industriales.

En esta misma línea, la colocación de la primera piedra del futuro Centro de Referencia Aeroespacial de Andalucía en Jerez de la Frontera, con un presupuesto de 7,6 millones de euros, permitirá formar cada año a 630 nuevos profesionales del sector.

Medio ambiente: prevención, agilidad y protección del patrimonio natural

La Junta de Andalucía **orienta su acción ambiental hacia la prevención, la protección del territorio y la agilidad administrativa**. Con más de la mitad de la superficie autonómica de carácter forestal –4,38 millones de hectáreas, el 71% en manos privadas–, el Presupuesto 2027 centra su actuación en la selvicultura preventiva, la conservación de espacios naturales, la economía circular y la educación ambiental. En primer lugar, el desarrollo de la nueva Ley de Montes simplificará los procedimientos y favorecerá una gestión más activa de la masa forestal, al poner el foco en la reducción de la carga de combustible y crear paisajes en mosaico. Se mantiene la colaboración con ayuntamientos en más de 517.000 hectáreas municipales. Se suman la restauración de áreas quemadas y un nuevo reglamento para la red de vías pecuarias, de más de 32.700 kilómetros.

Ante la nueva realidad de incendios de extraordinaria complejidad vivida en los últimos veranos, el Gobierno andaluz avanza hacia una respuesta integral y permanente, impulsando la creación de una **Comisión Interdepartamental para la Mitigación y Prevención del Riesgo de Incendios**, que coordinará las políticas, los programas, las actuaciones y los recursos de las distintas consejerías que inciden, directa o indirectamente, en la reducción de este riesgo. Con un enfoque transversal, preventivo, territorial y multisectorial, el objetivo es actuar de forma coordinada sobre las causas, los factores de propagación, los elementos vulnerables y las consecuencias de los incendios forestales, entendiendo la prevención como una labor que se desarrolla a lo largo de los doce meses del año y no solo en los meses de verano. A ello se suma el compromiso de restaurar los terrenos afectados por los grandes incendios del último verano, evitando procesos de erosión y minimizando los daños que puedan derivarse de las lluvias sobre la superficie forestal quemada.

El refuerzo del **dispositivo INFOCA** constituye otro de los pilares de esta estrategia. El operativo cuenta ya con casi 5.000 efectivos y avanza en su estabilidad y profesionalización, con la ampliación de la contratación del personal operativo a doce meses. A estos recursos humanos se suman más medios aéreos y autobombas, la mayor parte de la flota renovada, así como la inversión destinada a la mejora de las infraestructuras del dispositivo. Con todo ello, la Junta de Andalucía refuerza de manera permanente y estructural su capacidad para prevenir y afrontar los incendios forestales que han causado graves estragos en el territorio de la comunidad autónoma.

Por otra parte, la protección de los espacios naturales avanza con nuevos hitos**. La Red de Espacios Naturales Protegidos**, con 311 espacios y casi 2,9 millones de hectáreas, ampliará el Parque Natural de Los Alcornocales y modernizará sus equipamientos, con la próxima apertura del Centro de Visitantes de Conejeras en Sierra de las Nieves. En Doñana se renaturalizarán Veta la Palma y Tierras Bajas y se ampliará la Reserva de la Biosfera en 27.276 hectáreas. Los humedales, por su parte, contarán con un nuevo plan de gestión participativo.

La agilidad administrativa vertebra la nueva Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, que acortará plazos sin rebajar garantías, apoyada en nuevos reglamentos, una herramienta de participación ciudadana y la digitalización de ayudas forestales.

A medio camino entre la protección ambiental y la política industrial, la **economía circular** se proyecta como palanca de crecimiento económico. La nueva Estrategia de Economía Circular y el Reglamento de Residuos impulsarán la reducción, reutilización y valorización de recursos, con apoyo a los municipios más pequeños. Como ejemplo, en Huelva, la Junta de Andalucía respalda el Proyecto CirCular de Atlantic Copper, una planta única en España con 550 millones de inversión que reduce la dependencia de materias primas críticas. Desde 2019, la Unidad Aceleradora de Proyectos ha impulsado 156 iniciativas por 22.000 millones de euros y más de 64.500 empleos, en un contexto en el que la industria andaluza crece a mayor ritmo que la media nacional.

Andalucía, referente nacional en energías limpias

Andalucía ha acelerado su liderazgo nacional en energías limpias, pasando de la tercera a la primera posición entre las comunidades autónomas. Andalucía cerró el primer semestre del año con una potencia de generación eléctrica renovable de 19.518,4 megavatios, lo que representa ya casi el 73% de la capacidad de generación eléctrica total instalada. Solo entre enero y junio se sumaron 2.158,8 MW renovables, el mayor incremento semestral registrado hasta la fecha, que ha permitido movilizar una inversión superior a 2.100 millones de euros y crear más de 6.500 empleos asociados a su construcción. La energía solar fotovoltaica ha vuelto a ser la gran protagonista de este avance, con 2.123,2 MW instalados en 39 plantas de más de 10 MW y un total de 13.818,8 MW en funcionamiento, mientras el autoconsumo –que se extiende entre hogares, empresas e industrias– ha sumado 308,4 MW en el semestre y supera ya las 212.800 instalaciones en toda la comunidad. A esta tecnología se suman avances en energía eólica, con la incorporación de un nuevo parque en Huéneja (Granada) y la repotenciación de otro en Cádiz, así como pequeñas instalaciones hidráulicas y de biogás en varios municipios de Málaga.

Una vez superada la fase de crecimiento acelerado, se espera que ahora la región entre en una etapa de optimización y maduración del sistema, priorizando emplazamientos alternativos –suelos industriales o mineros degradados– para preservar el terreno agrario y fomentar la industria agrovoltaica. **A lo anterior hay que unir el impulso a nuevas oportunidades de negocio ligadas a los gases renovables y al aprovechamiento energético de los residuos**: tras la entrada en servicio, en diciembre de 2025, de la primera planta de inyección directa de biometano a la red de gas, situada en Huelva, en el primer semestre de 2026 se ha sumado una segunda instalación en Granada, que aprovecha anualmente unas 100.000 toneladas de residuos orgánicos de la actividad agroindustrial de la zona para generar 58 GWh de biometano al año, reforzando así la apuesta de la región por la economía circular.

Entre las grandes apuestas de futuro destacan los **vectores del hidrógeno verde, el biometano y los combustibles sostenibles de aviación**, con proyectos como el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve o la mayor planta de biocombustibles del sur de Europa, con 1.200 millones de euros de inversión. Se plantean también alianzas con regiones europeas como Baden-Wurtemberg o el puerto de Rotterdam.

Una minería moderna, sostenible y generadora de valor

Con 479 explotaciones activas y 22 de las 34 materias primas críticas de la UE en su subsuelo, la política minera de la Junta de Andalucía se apoya en la Estrategia para una Minería Sostenible 2030, que prioriza la **transformación y el valor añadido frente a la simple extracción**. La Junta de Andalucía impulsa proyectos como Masa Valverde o la ampliación de Riotinto, agiliza permisos con máximas garantías ambientales y refuerza la minería sostenible y la generación de valor en el territorio.

Desde el 1 de enero de 2026, la Junta de Andalucía ha asumido el liderazgo de la plataforma S3P Mining Regions (*Smart Specialisation Platform on Mining Regions*), creada por la Unión Europea en 2019 para impulsar la especialización inteligente en materias primas entre las regiones con actividad minera. Su objetivo es que estas regiones compartan conocimiento, buenas prácticas y estrategias de innovación en torno a la extracción, transformación y uso sostenible de las materias primas, alineando sus políticas industriales con los objetivos europeos de autonomía estratégica en minerales críticos. El liderazgo andaluz sitúa a la comunidad como referente dentro de esta red europea de regiones mineras y refuerza su papel en el diseño de políticas comunitarias sobre materias primas estratégicas.

Turismo y comercio: motores de empleo en todo el territorio

La Junta de Andalucía articula su apoyo al sector turístico en torno a varios planes estratégicos que combinan sostenibilidad, calidad e innovación para reforzar su papel como motor económico de la comu-

nidad. La **Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía 2027,** en su recta final, marca las líneas de actuación para diversificar los productos turísticos, reducir la estacionalidad y elevar el gasto medio del visitante mediante experiencias culturales, de naturaleza y de interior. En paralelo, **el Plan General de Turismo Sostenible META 2027** orienta las inversiones hacia la modernización de los destinos, la mejora de infraestructuras y la digitalización de los servicios turísticos, con programas de formación y ayudas para que las pymes del sector incorporen herramientas de marketing digital, inteligencia de datos o gestión energética en sus alojamientos.

A esta agenda se suman **los instrumentos de Andalucía TRADE para la internacionalización,** que financian hasta el 100% de los gastos de prospección y participación en ferias internacionales, facilitando que las empresas turísticas andaluzas abran nuevos mercados y consoliden sus relaciones comerciales. En el terreno de la gestión inteligente de destinos, herramientas como Nexus Turismo permiten analizar en tiempo real la demanda y el comportamiento de los visitantes, lo que facilita ajustar campañas y planificar la capacidad de cada destino de forma más eficiente.

Con el horizonte puesto en dotar al sector de un marco normativo moderno, claro y estable, la Junta de Andalucía trabaja además en una **nueva Ley de Turismo de Andalucía**, con la que quiere seguir defendiendo a las empresas y a los trabajadores de un sector que genera un impacto de 34.000 millones de euros y medio millón de empleos en la comunidad. Con este conjunto de planes y líneas de apoyo, el objetivo es consolidar un modelo turístico cada vez más competitivo, inteligente y sostenible.

El **comercio interior** constituye uno de los sectores más dinámicos y transversales de la economía andaluza. En torno al 30% de las empresas de la región pertenecen a este ámbito, con un peso destacado del comercio minorista, que actúa como motor de empleo, vertebración territorial y vida en los núcleos urbanos y rurales. La Junta de Andalucía ha apostado por modernizar y dar seguridad jurídica a esta actividad a través de un marco normativo estable, que regula desde la planificación comercial hasta los horarios de apertura, facilitando así la actividad de comerciantes y consumidores por igual.

En los últimos años, el Gobierno andaluz ha impulsado un proceso de **simplificación administrativa**, eliminando registros y trámites que suponían cargas innecesarias para el pequeño comercio, y avanzando hacia una regulación más ágil y menos burocrática. En paralelo, se ha reforzado el apoyo directo al sector mediante convocatorias periódicas de **subvenciones** destinadas al asociacionismo comercial, la modernización de establecimientos y la dinamización del pequeño comercio urbano, con especial atención a los centros comerciales abiertos como fórmula de revitalización de cascos históricos y zonas comerciales tradicionales.

La apuesta por la **digitalización** se ha materializado en iniciativas como la aplicación «Andalucía Comercio y Artesanía» (ACA), que permite a comerciantes y artesanos dar visibilidad *online* a sus productos y establecimientos. A ello se suman los **Premios Andalucía del Comercio Interior**, que reconocen anualmente la modernización empresarial, la creación de empleo y la renovación urbana comercial. Con este conjunto de medidas, la Junta de Andalucía consolida un modelo comercial competitivo, cercano y adaptado a los nuevos hábitos de consumo, preservando al mismo tiempo el tejido comercial tradicional como seña de identidad de los pueblos y ciudades andaluzas.

La política agraria y ganadera: modernización, relevo generacional y defensa del campo andaluz

La agricultura y la ganadería siguen siendo un pilar del empleo, las exportaciones y el equilibrio territorial de Andalucía y así lo refleja la acción del Gobierno andaluz, que ha combinado el apoyo inmediato ante circunstancias adversas, con una apuesta decidida por la **modernización estructural del sector**. El resultado de este esfuerzo se traduce en cifras: las exportaciones agroalimentarias han superado el año pasado los 16.600 millones de euros. Con precios justos para los agricultores, defensa frente a la competencia desleal de terceros países y un campo cada vez más tecnológico y sostenible, Andalucía consolida su papel como despensa de Europa y motor de desarrollo para el mundo rural.

Frente a la presión de la sequía, la volatilidad de costes y los episodios sanitarios que afectan a las explotaciones, la **Junta de Andalucía ha intensificado los paquetes de ayudas extraordinarias a agricultores y ganaderos,** reforzando al mismo tiempo el impulso a la agricultura de precisión y a las tecnologías 4.0

mediante convocatorias específicas que amplían el crédito disponible para llegar a más solicitantes. Estas líneas se complementan con los pagos de la Política Agraria Común, cuya defensa sin recortes de fondos constituye un compromiso firme del Gobierno andaluz, junto a la ralentización de aquellos objetivos del Pacto Verde Europeo que penalizan injustamente al sector productivo.

Uno de los grandes ejes de esta política es el **relevo generacional,** una apuesta clave para la productividad, la digitalización y la adopción de innovaciones en las explotaciones. En paralelo, la producción ecológica ha crecido más de un 30% en cinco años, un indicador claro de un cambio estructural hacia prácticas más eficientes y con acceso a mercados *premium*, lo que refuerza la renta agraria y la diferenciación exterior de los productos andaluces. A ello se suma la Ley del Regadío, que consolidará la seguridad jurídica de unos cultivos que ya generan el 64% de la producción agraria andaluza.

La **ganadería extensiva** recibe también una atención singular, con el impulso de un Pacto Andaluz que reconoce su valor económico, ambiental y cultural, incluida su contribución en la prevención de incendios forestales, que la Junta aspira a cuantificar y recompensar como servicio ambiental.

El impulso a la pesca y la acuicultura andaluzas

La política pesquera, por su parte, combina el respaldo económico al sector con un diálogo permanente que sitúa a pescadores y acuicultores en el centro de las decisiones. La Junta de Andalucía concreta su **apoyo a la comercialización y transformación, a las paradas temporales, a las organizaciones de productores y a una acuicultura y una pesca más sostenibles**. A ello se suman convocatorias específicas para los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero y Acuícola (GALPA), proyectos orientados a diagnosticar y dinamizar las zonas pesqueras. La Mesa de Interlocución Pesquera y Acuícola canaliza además las demandas del sector antes de citas europeas clave, como los encuentros con el comisario de Pesca y Océanos, garantizando que Andalucía defienda con fuerza los intereses de sus pescadores en Bruselas.

Cultura y deporte: señas de identidad y motor de futuro

La cultura es, junto con el deporte y el patrimonio histórico, una de las grandes señas de identidad de Andalucía: un espacio donde se expresan el talento y la creatividad de su gente, y también un motor de empleo, encuentro y convivencia que enriquece la vida cotidiana de la ciudadanía. Partiendo de esta idea, **la Junta de Andalucía sitúa la modernización de infraestructuras, el apoyo a los sectores creativos y la protección del patrimonio como ejes prioritarios de la legislatura**, con el propósito de consolidar lo avanzado en los últimos años y abrir nuevas etapas para ambos ámbitos. El esfuerzo presupuestario acompaña esta apuesta, un respaldo que se ha traducido en un aumento del 57% del empleo cultural, hasta 88.100 trabajadores, y del 55% en el número de empresas, hasta casi 40.000.

Ese crecimiento se apoya en la renovación de grandes equipamientos –el museo del antiguo Banco de España en Huelva, el Pabellón del Siglo XV que amplía de forma significativa la capacidad expositiva del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, la ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla o la culminación del Museo del Flamenco de Andalucía en Jerez de la Frontera– y en el cuidado del patrimonio histórico, con actuaciones en los teatros romanos de Cádiz y Málaga, la Alcazaba de Almería o los conjuntos de Carmona, Itálica y Madinat al-Zahra, en el marco de la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía. El flamenco, por su parte, sigue reforzándose como referente identitario, con nuevas ayudas a giras y producción fonográfica y la creación del Registro Andaluz del Flamenco, mientras la infancia y la juventud se colocan en el centro de la política cultural para ampliar el acceso a la creación desde edades tempranas.

En paralelo, **el ámbito deportivo avanza con el Plan Estratégico del Deporte Andaluz 2027-2034** y la transformación del Estadio La Cartuja, de cara al Mundial 2030, en una estrategia conjunta que combina modernización, sostenibilidad y proyección internacional y para cuyo proyecto la Junta ha diseñado una operación financiera que permitirá a la Sociedad llevar a cabo las inversiones necesarias.

La cooperación con las corporaciones locales: el enfoque municipalista del Presupuesto

El **enfoque municipalista constituye uno de los rasgos distintivos de la acción de gobierno de la Junta de Andalucía**. La política de cooperación con ayuntamientos y diputaciones busca reforzar la capacidad financiera de las corporaciones locales, garantizar la prestación de servicios básicos y favorecer un desarrollo equilibrado en todo el territorio. En 2027 el Gobierno andaluz **incrementará de nuevo la financiación destinada a los municipios**, hasta alcanzar la mayor cifra de la última década, un esfuerzo que se canaliza a través de transferencias incondicionadas para gasto corriente, fondos para inversiones en infraestructuras locales, programas de empleo compartidos con los consistorios y líneas específicas para reforzar los servicios sociales y las políticas de igualdad.

Buena muestra de este compromiso es la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA), que aumentará en 2027, prolongando una senda de incrementos anuales que contrasta con la congelación de ejercicios anteriores. A ello se suma el refuerzo del Programa de Cooperación Municipal, que financia proyectos de modernización administrativa, digitalización de servicios y mejora de equipamientos públicos, además de convenios bilaterales con diputaciones y grandes municipios en materia de agua, transporte metropolitano, vivienda o transición energética, dotando a las corporaciones locales del respaldo técnico y económico necesario para acometer proyectos que superan su capacidad presupuestaria.

Esta colaboración se completa con medidas de simplificación administrativa que agilizan la tramitación de subvenciones y facilitan el acceso de los ayuntamientos a los fondos europeos, un factor determinante para ejecutar las inversiones previstas en 2027. Con este conjunto de iniciativas, la Junta de Andalucía no solo asegura la estabilidad financiera de los municipios, sino que **impulsa una gobernanza más cercana y coordinada, en la que las corporaciones locales se consolidan como socios esenciales para el empleo, la sostenibilidad y la cohesión social en toda Andalucía**.

Una legislatura que arranca con las cuentas claras

Una economía que crece por encima de España y de la Unión Europea, un mercado laboral en máximos históricos, una industria cada vez más diversificada y competitiva, unas cuentas públicas saneadas y reconocidas por los mercados, y unos servicios públicos esenciales –sanidad, educación, dependencia y vivienda– que reciben un respaldo presupuestario creciente. Sobre esa base, la nueva legislatura se plantea como la continuidad de un mismo proyecto: **el de un Gobierno estable que entiende la disciplina fiscal, el impulso a la actividad productiva y la defensa de la igualdad de todos los andaluces frente a un sistema de financiación que continúa penalizando a la comunidad, como piezas de un mismo objetivo**. Con esa hoja de ruta, Andalucía afronta 2027 con la ambición de seguir siendo, como en los últimos años, uno de los grandes motores del crecimiento español.